

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



Medellín, veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05001 31 05 014 2013 00636 00 promovido por la señora **ELIANA ANDREA SALDARRIAGA GALINDO** quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores **JUAN SEBASTIÁN** y **MAURICIO RÍOS SALDARRIAGA** en contra de la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, al cual fueron vinculadas en calidad de intervinientes ad excludendum la señora **SANDRA SUGEY LÓPEZ HERNANDEZ** actuando en representación de su hija menor **HILARY RÍOS LÓPEZ** y la señora **MARISELA PÉREZ** actuando en representación de su hijo menor **KEVIN RÍOS PÉREZ**, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., y revisar en consulta en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en favor de la señora **ELIANA ANDREA SALDARRIAGA GALINDO** al resultar la sentencia emitida el 13 de junio de 2016 por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín adversa a sus intereses.

De conformidad con el numeral 1º del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 4 de junio de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las

tecnologías y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de emergencia, económica, social y ecológica”, se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **062**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

La señora Eliana Andrea Saldarriaga Galindo, demandó a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. pretendiendo el reconocimiento y pago de los siguientes conceptos: el 50% de la pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento de su compañero permanente Héctor Mauricio Ríos Molina a partir del 11 de diciembre de 2008, el acrecimiento de la prestación económica en un 50% en favor de sus hijos menores Juan Sebastián y Mauricio Ríos Saldarriaga, intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, indexación y costas del proceso.

Como fundamento de sus pretensiones expuso, que el señor Héctor Mauricio Ríos Molina falleció el 11 de diciembre de 2008. Convivió con el mencionado causante compartiendo techo, lecho y mesa durante más de 5 años de manera permanente e ininterrumpida hasta el día de su fallecimiento. Aduce que era el causante quien velaba económicamente por ella y por sus hijos menores Juan Sebastián y Mauricio Ríos Saldarriaga. El 11 de marzo de 2009 solicitó ante la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, misma que le fue reconocida a los menores Juan Sebastián y Mauricio Ríos Saldarriaga en calidad de hijos del causante en un 12.5% para cada uno, y negada a ella en calidad de compañera permanente.

Por su parte las señoras Sandra Sugely López Hernández actuando en representación de su hija menor Hilary Ríos López y Marisela Pérez actuando en representación de su hijo menor Kevin Ríos Pérez demandaron a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. pretendiendo la exclusión de la señora Eliana Andrea Saldarriaga Galindo de los derechos que pretende le sean reconocidos, el reconocimiento y pago de la pensión de

sobrevivientes en un 50% en favor de los menores Hilary Ríos López y Kevin Ríos Pérez, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en subsidio la indexación y costas del proceso.

Como fundamento de sus pretensiones se expuso, que el señor Héctor Mauricio Ríos Molina procreó con la señora Marisela Pérez al menor Kevin Ríos Pérez nacido el 3 de mayo de 2004, con la señora Sandra Sugely López Hernández procreó a la menor Hilary Ríos López nacida el 8 de junio de 2008, y con la señora Eliana Andrea Saldarriaga Galindo procreó dos hijos. El señor Héctor Mauricio Ríos Molina falleció el 11 de diciembre de 2008. Se aduce que el causante al momento de su muerte convivía con su madre desde hacía más de 8 meses. La Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. reconoció la pensión de sobrevivientes en favor de los menores Hilary Ríos López y Kevin Ríos Pérez en un 12.5% para cada uno “...*desconociendo que son 4 beneficiarios que tienen derecho a la pensión de sobrevivientes y el porcentaje corresponde al 25% por cada beneficiario...*”. El Fondo privado tiene retenido un 50% de la prestación porque la señora Eliana Andrea Saldarriaga Galindo manifiesta haber sido la compañera permanente del causante “...*hecho completamente ajeno a la realidad...*”.

En sentencia proferida el 13 de junio de 2016, el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín condenó a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. “...*a acrecentar el valor de la mesada pensional reconocida a cada uno de los cuatro hijos menores del causante Héctor Mauricio Ríos Molina a partir del día 11 de diciembre de 2008, teniendo en cuenta las mesadas adicionales de junio y diciembre a favor de los menores Hilary Ríos Pérez representada por Sandra Sugely López Hernández, el menor Kevin Ríos Pérez representado por su señora madre Marisela Pérez, y los menores Juan Sebastián y Mauricio Ríos Saldarriaga representados por la señora Eliana Andrea Saldarriaga Galindo, cuyo retroactivo pensional hasta la mesada que corresponde al mes de mayo de 2016 asciende a la suma de \$7.404.532.00, para cada uno. Se seguirá causando un 25% del salario mínimo legal mensual vigente a título de mesada pensional para cada uno de los cuatro hijos menores hasta el cumplimiento de los 18 años de edad o hasta los 25 años de edad por razones de estudio...*”. Declaró que “...*en caso de que se incurran en mora de mesadas pensionales a partir de la ejecutoria la presente sentencia, se causaran intereses*

moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; y en caso de que se proceda a pagar sin incurrir en mora se deben indexar los dineros correspondientes al retroactivo pensional reconocido...". Declaró fundadas las excepciones de mérito propuestas por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. denominadas inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, respecto a la señora Eliana Andrea Saldarriaga Galindo, por considerar que no demostró el requisito de convivencia en calidad de compañera permanente del causante. Absolvió de las demás pretensiones formuladas en la demanda, y condenó en costas a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.

RECURSO DE APELACIÓN

La apoderada de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. considera que no hay lugar a la indexación ni a las costas procesales. Frente a la indexación aduce que se trata de un debate que inminentemente debía ser resuelto por la jurisdicción, y por ello, el Fondo privado mantuvo en reserva las sumas de dinero depositadas en la cuenta de ahorro pensional, que constituyen un patrimonio autónomo y que se actualizan por sí mismas por efectos de los movimientos del mercado dependiendo de los instrumentos financieros en que están invertidas, que además las pensiones se actualizan anualmente con base en el salario mínimo legal mensual vigente, por ende, su representada no puede ser condenada a una actualización adicional, y en cuanto a la condena en costas, reitera que se encontraba en disputa el derecho pensional en cabeza de la demandante, máxime que existían versiones encontradas respecto de la convivencia con el causante, que como se pudo demostrar en este juicio, no existió.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las apoderadas de las señoras Eliana Andrea Saldarriaga Galindo, Sandra Sugely López Hernández y Marisela Pérez allegaron oportunamente escrito de alegatos de conclusión solicitando se confirme la providencia de primera instancia.

La apoderada de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. presentó dentro del término legal escrito de alegatos de conclusión haciendo referencia a los mismos puntos del recurso de apelación.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico, de esta segunda instancia, consiste en determinar si hay lugar a la indexación del retroactivo pensional reconocido en favor de cada uno de los menores Juan Sebastián y Mauricio Ríos Saldarriaga, Hilary Ríos López y Kevin Ríos Pérez, representados en su orden: por Eliana Andrea Saldarriaga Galindo, Sandra Suguey López Hernández y Marisela Pérez, y a la condena en costas.

En virtud del grado jurisdiccional de consulta en favor de la señora Eliana Andrea Saldarriaga Galindo, como problema jurídico la Sala deberá establecer si a la antes mencionada le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento del asegurado Héctor Mauricio Ríos Molina.

CONSIDERACIONES

Examinada en conjunto la prueba documental que reposa de folios 11 a 18, 23, 24, 44, 45, 65 a 67, 74 y 80 a 82 del expediente. La Sala encuentra:

- i) Que el señor Héctor Mauricio Ríos Molina falleció el 11 de diciembre de 2008.
- ii) Que los menores Juan Sebastián Ríos Saldarriaga, Mauricio Ríos Saldarriaga, Hilary Ríos López y Kevin Ríos Pérez, hijos del causante nacieron en su orden: el 25 de noviembre de 2006, el 9 de agosto de 2009, el 8 de junio de 2007 y el 3 de mayo de 2004.
- iii) Que las señoras Marisela Pérez y Sandra Suguey López Hernández, el 9 de julio de 2009 y el 2 de marzo de 2011, respectivamente, solicitaron en representación de sus hijos menores Kevin Ríos Pérez y Hilary Ríos López ante la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. el

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento de su padre Héctor Mauricio Ríos Molina.

iv) Que el 11 de marzo de 2009 la señora Eliana Andrea Saldarriaga Galindo reclamó ante el Fondo privado en nombre propio y en representación de su hijo menor Juan Sebastián Ríos Saldarriaga la prestación económica aduciendo la calidad de compañera permanente, y el 5 de mayo de 2012 solicitó el reconocimiento pensional en representación de su hijo menor Mauricio Ríos Saldarriaga.

v) Que la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. le concedió a los menores Juan Sebastián Ríos Saldarriaga, Mauricio Ríos Saldarriaga, Hilary Ríos López y Kevin Ríos Pérez la pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento de su padre Héctor Mauricio Ríos Molina en un porcentaje del 12.5 para cada uno, a partir del 11 de diciembre de 2008 y sobre un salario mínimo legal mensual vigente, y le negó el 50% de la prestación económica a la señora Eliana Andrea Saldarriaga Galindo aduciendo que *“...En cuanto al porcentaje que actualmente se encuentra en reserva y que corresponde al porcentaje que le correspondería a la señora Eliana Andrea Saldarriaga Galindo quien se presenta en calidad de compañera permanente, le informamos que realizada una validación a la documentación aportada y a las gestiones de campo efectuadas no se logró establecer con exactitud el tiempo de convivencia entre nuestro afiliado, el señor Héctor Mauricio Ríos Molina (q.e.p.d.) y la señora Eliana Andrea Saldarriaga Galindo...”*.

Y, vi) Que al trámite administrativo realizado por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. fueron allegadas las siguientes declaraciones:

- Declaración extrajuicio de 12 de febrero de 2009 donde la señora Eliana Andrea Saldarriaga Galindo afirmó que: *“...Declaro que vivía bajo el mismo techo en unión libre desde hacía cinco (5) años, en forma continua e ininterrumpida y hasta la fecha de su fallecimiento con el señor Héctor Mauricio Ríos Molina, de nuestra unión hay dos (2) hijos: Juan Sebastián Ríos Saldarriaga, menor de edad y goza de sus facultades físicas y mentales y mi segundo hijo lo estoy esperando ya que actualmente cuento con tres (3) meses de embarazo...”*.

- Declaración extrajuicio de 4 de febrero de 2009 en la cual las señoras Claudia Luz Galindo Mesa y Anabel Galindo Mesa informaron que: *“...Declaramos que desde hace 22 años conocemos a la señora Eliana Andrea Saldarriaga Galindo, nos consta que convivió en unión marital de hecho durante cinco (5) años con el señor Héctor Mauricio Ríos Molina, además nos consta que ella lo acompañó hasta el último día de su fallecimiento que fue el 11 de diciembre de 2008, que de esa unión existe un hijo de nombre Juan Sebastián Ríos Saldarriaga y además nos consta que la señora Eliana Andrea Saldarriaga Galindo se encuentra en proceso de gestación y tiene dos meses...”*.
- Declaración extrajuicio de 24 de marzo de 2012 donde la señora Martha Lucia Molina Patiño indicó: *“...Declaro que mi hijo Héctor Mauricio Ríos Molina convivió durante un año aproximadamente con la señora Eliana Andrea Saldarriaga Galindo, pero al momento del fallecimiento de Mauricio ellos ya se habían separado hacía 7 meses, de esta unión existen 2 hijos llamados Juan Sebastián Ríos Saldarriaga y Mauricio Saldarriaga, este no fue reconocido por Héctor Mauricio Ríos Molina...”*.
- Declaración juramentada de 10 de junio de 2009 mediante la cual la señora Marisela Pérez adujo en calidad de excónyuge del señor Héctor Mauricio Ríos Molina que *“... desconozco la existencia de otras personas con mejor o igual derecho a reclamar la prestación económica que legalmente corresponda ocasionada con motivo del fallecimiento del señor Héctor Mauricio Ríos Molina y que por ello exonero desde ahora a Porvenir S.A. de cualquier responsabilidad frente a eventuales futuras reclamaciones por este mismo concepto que se llegaren a presentar por personas que acrediten igual o mejor derecho...”*.

DEL DERECHO PENSIONAL

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han reconocido que por regla general y salvo ciertas excepciones, el régimen jurídico aplicable para el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes es el vigente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado, considerando que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no consagró un régimen de transición en relación con la misma.

El documento que reposa a folios 13 del expediente informa que el señor Héctor Mauricio Ríos Molina falleció el 11 de diciembre de 2008. Por ende, las normas aplicables al caso concreto son las contenidas en los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003.

Conforme al artículo 12, tienen derecho a la pensión de sobrevivientes los miembros del grupo familiar del afiliado que fallece, siempre y cuando éste hubiese cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los tres (3) últimos años inmediatamente anteriores a su fallecimiento, dado que el requisito de fidelidad al sistema fue declarado inexecutable en la sentencia C-556 de 2009, y según el artículo 13, son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: **en forma vitalicia**, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite que a la fecha de fallecimiento del causante tenga 30 años o más de edad; **y de manera temporal**, el cónyuge o la compañera permanente supérstite que a la misma fecha tenga menos de 30 años de edad y no haya procreado hijos con éste.

En este evento no existe discusión respecto del presupuesto de la densidad de semanas aludido.

Ahora. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en las sentencias SL 32393 de 20 de mayo de 2008, SL 45600 de 22 de agosto de 2012, SL 793 de 2013, SL 1402 de 2015, SL 14068 de 2016 y SL 347 de 2019, había sido enfática en señalar, que la Ley 797 de 2003 exige una convivencia mínima para ostentar la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, tanto para cónyuge como para compañero o compañera permanente, de cinco años, independientemente de si el causante de la prestación es un afiliado o un pensionado.

Sin embargo, en providencia **SL 1730, Radicado 77327 de 3 de junio de 2020**, la Honorable Corte Suprema de Justicia, ante su nueva integración de su Sala de Casación Laboral, revaluó la referida posición jurisprudencial, para sentar nueva doctrina frente a la correcta interpretación de lo dispuesto en el literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, advirtiendo que la redacción de tal precepto legal, exige un tiempo mínimo de convivencia de 5 años pero “únicamente al

caso en que la pensión de sobrevivientes se causa por muerte del pensionado”, procurando con ello evitar conductas fraudulentas, “convivencias de última hora con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión de sobrevivientes, por la muerte de quien venía disfrutando de una pensión”. Definió dicha Corporación que:

“...Para ser considerado beneficiario de la pensión de sobrevivientes, en condición de cónyuge o compañero o compañera permanente supérstite del afiliado al sistema que fallece, no es exigible ningún tiempo mínimo de convivencia, toda vez que con la simple acreditación de la calidad exigida, cónyuge o compañero (a), y la conformación del núcleo familiar, con vocación de permanencia, vigente para el momento de la muerte, se da cumplimiento al supuesto previsto en el literal de la norma analizado, que da lugar al reconocimiento de las prestaciones derivadas de la contingencia...”.

Así mismo, el Alto Tribunal aclaró que para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, “no hay lugar a efectuar ninguna distinción entre beneficiarios de un mismo tipo de causante, para el caso un afiliado, esto es, según la forma en la que se constituya el núcleo familiar, si lo es por vínculos jurídicos o naturales, en tanto éste, es decir, el núcleo familiar, es lo que protege el Sistema General de Seguridad Social.”

Igualmente precisó que si bien el artículo 10 del Decreto 1889 de 1994, consideraba compañera o compañero permanente para efectos de la pensión de sobrevivientes causada por la muerte de un afiliado, la última persona que hubiese hecho vida marital con aquel durante un lapso no inferior a dos (2) años, éste estatuto no puede ir más allá de lo dispuesto en la ley, imponiendo requisitos que superen lo legalmente establecido, máxime que fue subrogado por el artículo 2.2.8.2.3 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016, luego, para determinar quién ostenta la calidad de compañero o compañera permanente de un afiliado, a efectos de lo dispuesto en el literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, debe acudirse a la noción constitucional de familia, en la forma en la que ha sido ampliamente analizada por la Corte Constitucional.

Señalando finalmente que, aunque aparentemente la diferenciación implícita en la disposición analizada surge discriminatoria, a la luz de lo dispuesto en el artículo

13 de la Constitución Nacional, “ello no puede entenderse así, por cuanto la igualdad solo puede predicarse entre iguales, debiendo justamente establecerse para salvaguardar ese principio, la diferencia de trato entre desiguales”, lo que ocurre en estos eventos, al ser el afiliado quien está sufragando el seguro para cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte, y no tener un derecho pensional consolidado, y el pensionado quien ya cuenta con el derecho, dejando causada la prestación a los miembros de su núcleo familiar con el solo hecho de la muerte, circunstancia en la que adquiere relevancia la exigencia de un mínimo de tiempo de convivencia, precisamente para evitar fraudes al sistema pensional.

Tal criterio fue ratificado en sentencia **SL 3626 de 2020, Radicado 82317 de 23 de septiembre de 2020**, donde al citarse la referida sentencia SL 1730, se indicó:

“...En relación con el asunto controvertido, la doctrina reiterada de la Corte, verbigracia, en las sentencias SL1402-2015, SL14068-2016 y SL347-2019, había sido la de sostener que el término de convivencia mínimo tanto para beneficiarios de afiliados al sistema general de pensiones como de pensionados era de cinco (5) años anteriores al fallecimiento del causante. Sin embargo, esta Sala recientemente --al efectuar un nuevo estudio de la norma acusada, esto es, el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003--, modificó la anterior posición jurisprudencial y, en su lugar, adoctrinó que, para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, en condición de cónyuge, compañero o compañera permanente supérstite del afiliado fallecido, no era dable exigir *ningún tiempo mínimo de convivencia*, toda vez que con la simple acreditación de la calidad requerida y la conformación del núcleo familiar con vocación de permanencia, vigente para el momento de la muerte, se acata el supuesto previsto en la norma, previo cumplimiento, obviamente, de los requisitos de causación pertinentes...”.

Así mismo, en la sentencia **SL 3785 de 2020, Radicado 76472 de 30 de septiembre de 2020**, se precisó:

“Ahora bien, ese sostenimiento de los lazos familiares hasta el momento de la muerte del causante cobra una mayor relevancia en función de lo recientemente adoctrinado por esta sala en la sentencia CSJ SL1730-2020, en la que se dijo que, tratándose de la muerte de afiliados:

[...] con la simple acreditación de la calidad exigida, cónyuge o compañero (a), y la conformación del núcleo familiar, con vocación de permanencia, vigente para el momento de la muerte, se da cumplimiento al supuesto previsto *en el literal de la norma analizado*, que da lugar al reconocimiento de las prestaciones derivadas de la contingencia, esto es, la pensión de sobrevivientes, o en su caso, la indemnización sustitutiva de la misma o la devolución de saldos, de acuerdo al régimen de que se trate, y el cumplimiento de los requisitos para la causación de una u otra prestación.”

Y en la sentencia **SL 4008 de 2020, Radicado 76044 de 5 de octubre de 2020**, se dijo:

“...De ahí que, entre 2005 y 2011 se exigía a la cónyuge del afiliado o del pensionado no solo los cinco años de convivencia, sino que esta permaneciera vigente al momento de la muerte del causante, pues fue solo con la CSJ SL, 29 nov. 2011, rad. 40055 que la Corte precisó que tales años de cohabitación podían cumplirse en cualquier tiempo y esta última postura estuvo vigente hasta que la reciente sentencia CSJ SL1730-2020 precisó que tal requerimiento solo se realiza con respecto de la consorte o compañera permanente del pensionado, mas no del afiliado...”.

De otro lado, en torno al adecuado entendimiento de dicho precepto legal, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha sostenido, de vieja data, que el término de convivencia, que en el marco de la seguridad social permite acceder al derecho a la pensión de sobrevivientes, en tratándose de cónyuges o compañeros (as) permanentes, hace referencia a la vida común en pareja, caracterizada por lazos de amor, solidaridad, afecto, colaboración y apoyo mutuo, con vocación de formar una familia, entendida entonces como la «efectiva comunidad de vida, construida sobre una real convivencia de la pareja, basada en lazos de afecto y el ánimo de brindarse sostén y asistencia recíprocos» (Sentencias SL de 29 noviembre de 2011, radicado 40.055; SL 4549 de 2019, radicado 68.689 y SL 3861 de 2020).

El Alto Tribunal en la sentencia SL 6286 de 2017, radicado 62.413, resaltó que: *“...En la perspectiva trazada, de tiempo atrás tiene dicho la Sala que en el caso concreto del cónyuge y los compañeros permanentes el concepto de convivencia comprende circunstancias que van más allá del meramente económico, pues implica el acompañamiento espiritual permanente, proyecto familiar común, apoyo económico, el compartir la vida de pareja y la cohabitación bajo el mismo techo, que es la regla...”*.

A juicio de la Corporación más allá de la situación formal existente entre la pareja, lo que determina el derecho a la pensión de sobrevivientes es una convivencia real, bajo las características anotadas, en tanto adquiere *“...una connotación eminentemente material en oposición a los aspectos meramente formales del vínculo, además de que, jurídicamente hablando, debe ser estable, permanente y lo suficientemente sólida*

para consolidar un grupo familiar, que es el objeto de protección constitucional y legal...". (Sentencias SL 11940 de 2017, radicado 47.913 y SL 3861 de 2020).

La Juez A quo para motivar su decisión precisó que “...la parte demandante encuentra ciertas falencias en cuanto a la demostración de los 5 años de convivencia anteriores al fallecimiento del afiliado, el asegurado Héctor Mauricio Ríos Molina, porque es claro y en eso también es menester traer a colación una declaración extra proceso, que Héctor Mauricio hizo conjuntamente con la demandante ante Notario visible a folio 122, en la cual se presentaron en la Notaria 18, y dice bajo la gravedad del juramento: declaro que los declarantes son Héctor Mauricio Ríos Molina y Eliana Andrea Saldarriaga Galindo, esta es del 11 de diciembre del año 2006, “declaramos que entre nosotros existe unión marital de hecho hace 3 años tiempo durante el cual hemos vivido durante el mismo techo familiar de dicha unión hay un hijo de nombre Juan Sebastián Saldarriaga”, hasta aquí la declaración leída al Notario, sumando el testimonio del señor John Mario Uribe traído por la parte demandante es factible darle credibilidad a que realmente la unión o la convivencia entre Héctor Mauricio Ríos Molina y Eliana Andrea Saldarriaga se inició en el año 2003, lo que en este caso, en este proceso a juicio el Despacho merece cuestionamiento probatorio es la fecha de culminación de esta convivencia, porque el despacho otorga credibilidad a lo dicho por la señora Martha Lucia Molina Patiño, quien más que una madre puede dar fe, de lo que aquí se está debatiendo y es claro que la señora madre declara que en el ultimo año anterior a su fallecimiento de Héctor Mauricio por los problemas que el mismo relataban se presentaban en su vida marital con Eliana Saldarriaga, se dio una ruptura de esta relación y hay unos indicios para darle credibilidad a este versión, y era la vida un poco promiscua que llevaba Héctor Mauricio, un parámetro de eso es que tiene 4 hijos en 3 mujeres, y para la fecha en que se dice se pudo dar esta ruptura de la convivencia con Eliana estaba sosteniendo una relación que si no era de convivencia si era una relación a la cual le dedicaba tiempo con la señora Sandra, que a la postre es la madre Hilary, y que nació fruto de esta relación entre el año 2005 y 2006, y recuérdese que la filosofía de la norma es premiar a quienes mantengan vivo o actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo entendiendo como acompañamiento espiritual, el apoyo económico la vida en común que no se da cuando hay estados de separación y aunque es cierto que Héctor Mauricio visitaba regularmente a Eliana, en su casa y habitación pues parece que estos encuentros eran más bien encuentros de otra naturaleza, y prueba de ello, es que fruto de un encuentro de estos, de una relación íntima de estas de carácter sexual, nació el segundo hijo de la demandante, pero el hecho es que uno se

pregunta si este hecho es suficientemente convincente para concluir que había una convivencia permanente, respetuosa desde el punto de vista de acompañamiento espiritual económico y afectivo realmente con la declaración de la señora madre del causante pues todo da a entender que esta ruptura se dio al menos de la convivencia con Eliana en el último año anterior al fallecimiento, incluso también es indiciario lo que dice John Mario Uribe testigo presentado por la demandante quien señala que él se alejó entre el 2006 y el 2007 porque él vivía con ellos y cuando vivía en el 2007, ya Héctor Mauricio no vivía aunque respondía por la obligación de su hijo, lo cual es claro, pero una cosa es responder por la obligación, y otra cosa es que quede demostrada la convivencia, quiere decir entonces que a juicio del Despacho al menos la convivencia está probada al menos hasta el año 2007, comienzos del año 2008 y queda faltando para demostrar ese último año...”.

La Sala comparte este razonamiento.

En **primer lugar**, porque es el resultado del análisis de los medios probatorios acercados al proceso, que se enmarca dentro de las facultades que el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social le brinda al Juzgador de apreciar libremente las pruebas aducidas en el juicio para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos, con base en aquellas que lo persuadan mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal.

En **segundo lugar**, porque tal y como lo ha precisado la Sala Laboral del órgano de cierre de esta jurisdicción, lo que quiso amparar el legislador, de cara a la prestación pensional de sobrevivientes, es la perdurabilidad, de manera patente, de la «comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable (...)»¹.

En **tercer lugar**, porque en el interrogatorio de parte absuelto por la señora Eliana Andrea Saldarriaga Galindo, afirmó que convivía con el señor Héctor Mauricio Ríos Molina en una casa de su abuelo materno, que vivían ella, su madre y Héctor Mauricio, que éste tuvo un accidente “...el ese día salió de la casa

¹ CSJ SL, 2 mar. 1999, rad. 11245 y CSJ SL, 14 jun. 2011, rad. 31605; SL7299-2015; SL1399-2018

salió como a las 11 de la noche y se fue que iba para donde unos amigos y el accidente fue en la mañana que me llamó la hermana cuando tuvo el accidente...” y que falleció a los 5 días en el hospital “...en ese momento estaba viviendo conmigo, pero como toda relación teníamos problemas, él se iba para donde la mamá, pero volvía, él se levantaba a trabajar, llegaba en la noche, se quedaba con nosotros un fin de semana, casi cada día salía a tomar, a él le gustaba mucho el trago...”.

Adicionalmente, al proceso fueron presentados los testimonios de los señores Martha Lucia Molina Patiño, María del Carmen Guzmán Arboleda y John Mario Uribe.

La señora **Martha Lucia Molina Patiño**, madre del señor Héctor Mauricio Ríos Molina manifestó que conoce a la señora Eliana Andrea Saldarriaga Galindo hace por ahí 6 años porque convivió unos días con su hijo, que fueron novios en 2004 y después convivieron un tiempo, que convivieron más o menos de 2 años y 8 meses, más o menos en el 2006, y cuando se le preguntó ¿Sírvese informarle al Despacho si después de la convivencia del señor Héctor con la señora Eliana a partir del año 2006 el señor Héctor regresó a su casa y cuánto tiempo se quedaba allí?, respondió: *“...Pues el regresó varias veces porque él me decía, “mamá si yo me dejo con Eliana usted me recibe” y yo le decía que claro que esta es su casa. ¿El tiempo que se quedaba en su casa cuánto tiempo permanencia en ella? Pues mucho tiempo porque en el 2007, estuvo casi todo el año en mi casa, y para el momento del fallecimiento llevaba casi un año que estaba en la casa mía. ¿El señor Héctor vivía a su vez en casa de la señora Eliana? El cómo que iba. ¿Cuántas veces iba a la casa de la señora Eliana? Me imagino que los fines de semana día sábado. ¿Sabe usted si don Mauricio tenía sus objetos personales en la casa de doña Eliana? Él ya se había llevado una parte para mi casa como el equipo, el televisor y la ropa, y dejó otra parte allá. ¿Esa ruptura entonces no había sido definitiva? Pues él decía que con ella ya no tenía nada. ¿Aclarémosle un poco al Despacho, cuántos días de la semana él permanecía en su casa y cuántos días en la de Eliana? En mi casa permanecía 6 días, porque yo le despachaba el almuerzo para irse a trabajar y el regresaba y dormía en mi casa. ¿Dígale al Despacho cuántos hijos tenía Héctor con la señora Eliana? Un hijo. ¿Qué edad tenía ese niño para el fallecimiento de Héctor y cuál es el nombre de él? Tenía 5 años. ¿Héctor dejó más hijos con la señora Eliana? Después del fallecimiento de él, ella dijo que estaba en embarazo de él. ¿Usted*

sabe cuántos meses tenía doña Eliana para el momento del fallecimiento de Héctor? Pues ella misma nos dijo que tenía 15 días. ¿Sabe cuál es el nombre de ese niño? Mauricio. ¿Le conoció usted alguna pareja distinta a Mauricio para el momento del fallecimiento distinta a doña Eliana? Pues la señora Sandra. ¿Vivía Sandra con don Mauricio? No. ¿Entonces qué clase de relación era la que usted manifiesta? Eran así como novios. ¿La señora Sandra tenía hijos con don Mauricio? Si una niña. ¿De qué edad? Ella en el momento tiene 5 años. ¿Ella era mayor que Sebastián? Sebastián es mayor que ella por dos meses. ¿Usted dijo ahora que ese último año 2008 en el que su hijo falleció estuvo en su casa y que igualmente iba los sábados o los fines de semana donde Eliana y que se había llevado algunas de sus pertenencias para su casa, qué le decía él que por qué no estaba radicado totalmente en la casa de Eliana, que impedimentos le llevaban no estar con ella de tiempo completo? Él decía que problemas de pareja, que tenían muchos problemas, muchas incomprensiones...”

La señora **María del Carmen Guzmán Arboleda** indicó que conoce a la señora Eliana Andrea Saldarriaga Galindo, porque con su tía María Alcira Galindo Mesa, tienen en sociedad una peluquería y es amiga de la familia de la demandante, que en el 2003, por comentarios de la familia, supo que Eliana Andrea estaba ennoviada con Héctor Mauricio Ríos Molina y que en septiembre estaban viviendo juntos, que los veía juntos en las reuniones familiares “...*íntimamente no puedo decir cómo era porque como le digo una pareja normal, pero ellos se paseaban por la peluquería porque ellos vivían por Santa Cruz y la pareja normal...*”, que escuchaba en la peluquería decir de peleas entre ellos como cualquier pareja, que para el momento del fallecimiento del señor Héctor Mauricio vivía con Eliana Andrea y la mamá de ella, que procrearon un niño Sebastián y después de que él murió Eliana Andrea quedó en embarazo del otro niño Mauricio, y cuando se le preguntó: ¿A usted le consta que el señor Héctor pernotaba todos los días en la casa de ella?, respondió: “...*Pues si según yo veía si, ellos vivían en Santa Cruz y luego se pasaron más abajo de la peluquería por Andalucía y uno no estaba muy metido, pero siempre los veía subir y bajar como una pareja normal, ¿Usted supo si antes del fallecimiento del señor Héctor Mauricio este estaba viviendo en otro sitio que no fuese la casa de doña Eliana? No yo sé que visitaba a la mamá, de pronto amanecía donde la mamá, pero ya eran cosas muy personales que no tenía como saber. ¿Conoció usted alguna de las dificultades que ellos tenían*

como pareja y si en algún momento el señor Héctor Mauricio abandono el lugar y a donde se dirigió? No, de pronto yo escuchaba comentarios que estaban bravos, pero de fondo no...”.

Y el señor **John Mario Uribe** adujo que conoce a la señora Eliana Andrea Saldarriaga Galindo desde 2002 porque fue novio de la mamá de ella, incluso vivieron juntos desde 2004 hasta 2006 más o menos, y vivían con Eliana y Héctor Mauricio, que regresó a vivir con la madre de Eliana Andrea cómo al año, en 2007 pero Héctor Mauricio ya no vivía allí, “...él vivió con nosotros y en el momento en que el falleció él estaba donde la mamá, porque había tenido problemas con Eliana, pero ellos estaban juntos...”, que llevaban peleados un mes más o menos, “... él se mantenía allá y donde la mamá, pero también tenía sus cosas allá...”, que permanecía más que todo en semana donde Eliana Andrea y los fines de semana visitaba a su madre, que procrearon un hijo Juan Sebastián, cuándo Héctor Mauricio murió Eliana Andrea tenía un mes de embarazo y tenían problemas, y que no le conoció otra pareja al causante.

A juicio de la Sala, si bien los declarantes Martha Lucia Molina Patiño, María del Carmen Guzmán Arboleda y John Mario Uribe ciertamente describen con espontaneidad, credibilidad, claridad y coherencia las razones y ciencia de sus dichos, informando lo que les consta directamente frente a la convivencia entre los señores Héctor Mauricio Ríos Molina y Eliana Andrea Saldarriaga Galindo; lo cierto es que conforme a la línea jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia referida en precedentes, dichas aseveraciones no resultan suficientes para establecer como lo define la Corporación mencionada el requisito de convivencia, entendiéndolo como la conformación de una familia “con vocación de permanencia, vigente para el momento de la muerte del afiliado fallecido”. Ello, por cuanto la deponente Martha Lucia Molina Patiño, madre del causante aseveró que su hijo sí convivió en unión marital con Eliana Andrea Saldarriaga Galindo por un periodo de más o menos de 2 años y 8 meses entre 2004 y 2006, “...porque en el 2007 estuvo casi todo el año en mi casa, y para el momento del fallecimiento llevaba casi un año que estaba en la casa mía... se había llevado el equipo, el televisor y la ropa”, que no convivía de tiempo completo con ésta pues decía que “...con ella ya no tenía nada...”, que tenía problemas de pareja, muchas

incomprensiones; afirmaciones que fueron corroboradas con el testimonio del señor John Mario Uribe quien dijo que vivió con Héctor Mauricio, Eliana Andrea y su madre del 2004 al 2006 más o menos, que cuando regresó a vivir con la madre de Eliana Andrea en 2007 ya Héctor Mauricio ya no vivía allí, que “...*en el momento en que él falleció estaba donde la mamá, porque había tenido problemas con Eliana...*”, y que llevaban peleados un mes más o menos. Hechos que dan certeza sin lugar a dudas que entre los señores Héctor Mauricio Ríos Molina y Eliana Andrea Saldarriaga Galindo existió una convivencia ininterrumpida, por lo menos entre 2004 y 2006 y que perdió su vocación de permanencia y vigencia en 2007 cuando el causante se fue a vivir a la casa de su madre, donde habitó hasta la fecha de su deceso.

Señaló también la señora Martha Lucia Molina Patiño que Héctor Mauricio permanecía en su casa 6 días, le despachaba el almuerzo para irse a trabajar y regresaba para dormir, y los fines de semana, el sábado, iba donde Eliana Andrea; mientras que el deponente John Mario Uribe indicó que Héctor Mauricio se mantenía donde Eliana Andrea y donde la mamá y que allí también tenía sus cosas, que permanecía más que todo en semana donde Eliana Andrea y los fines de semana visitaba a su madre. En criterio de la Sala, y pese a que existe contradicción respecto de los días en que se aduce estaba el causante con la señora Eliana Andrea y con su madre; en todo caso resulta evidente que no existía una real convivencia de pareja, máxime que se trata de una circunstancia que no le consta al señor John Mario Uribe de manera directa, toda vez que afirmó que en los años 2007 y 2008 ya no vivía con la pareja.

Y la señora María del Carmen Guzmán Arboleda manifestó, que por comentarios de la familia de Eliana Andrea, supo que ésta estaba ennoviada con Héctor Mauricio Ríos Molina y que en septiembre estaban viviendo juntos, que los veía juntos en las reuniones familiares y cuando iban por la peluquería porque ellos vivían por santa Cruz y luego en Andalucía, que sabía que el causante visitaba a la mamá y de pronto amanecía donde la mamá, y que escuchaba comentarios que estaban bravos, tornándose para la Sala de Decisión en una testigo de oídas

respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la convivencia existente entre la pareja.

En **cuarto lugar**, porque obran de folios 65 a 67 y 80 a 82 las declaraciones con fines extra proceso rendidas por las señoras Eliana Andrea Saldarriaga Galindo, Claudia Luz Galindo Mesa, Anabel Galindo Mesa y Martha Lucia Molina Patiño, allegadas por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. La Juzgadora de primera instancia las decretó como prueba en la audiencia celebrada el 27 de noviembre de 2015. En ellas, la demandante dio fe de su convivencia en unión libre durante 5 años en forma continua e ininterrumpida con el causante hasta la fecha de su fallecimiento. Las señoras Claudia Luz Galindo Mesa y Anabel Galindo Mesa, informaron que Eliana Andrea Saldarriaga Galindo y Héctor Mauricio Ríos Molina convivieron en unión marital de hecho por un periodo de 5 años hasta el 11 de diciembre de 2008, cuando ocurrió su deceso. Y la señora Martha Lucia Molina Patiño, madre del causante indicó que su hijo “...convivió durante un año aproximadamente con la señora Eliana Andrea Saldarriaga Galindo, pero al momento del fallecimiento de Mauricio ellos ya se habían separado hacía 7 meses...”.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha explicado que las declaraciones extrajuicio recibidas para fines no judiciales, como las practicadas ante alcalde o notario, pueden tomarse como documentos declarativos provenientes de terceros, para cuya valoración, según el artículo 220 del Código General del Proceso, no necesitan ratificación, salvo que la parte contraria lo solicite. Razonamiento que según la Corporación se acompasa con la política legislativa que en materia probatoria se viene adoptando, con la finalidad de menguar el exceso de rigor formal que antaño campeaba en los códigos de procedimiento. Así lo indicó en la sentencia de Radicado 37.517 del 29 de mayo de 2012, reiterada en sentencias de Radicado 42536 del 6 de marzo de 2013, SL 1227 de 2015, SL 14067 de 2016 y SL 3134 de 2020 de Radicación 70165 de 25 de agosto de 2020, en esta última indicó:

“...De conformidad con el criterio expuesto, en ninguna violación medio pudo incurrir el juez de segundo grado, al haber valorado las declaraciones extrajuicio,

rendidas en la Notaría Primera del Circulo de Fusagasugá por Nelsi Patricia y Óscar Javier Cucaita Martínez, pues no era necesaria su ratificación dentro del proceso, como se dejó visto, salvo que la parte contraria la hubiese solicitado, lo cual no aconteció en el presente asunto en ningún momento de las instancias previas...”.

En el presente asunto, la parte actora no solicitó la ratificación de tales declaraciones, por ello, no era necesario en este juicio llevar a cabo dicha diligencia de ratificación para que tuviesen mérito probatorio. Con mayor razón si se tiene en cuenta que el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social le confiere al Juzgador la facultad de formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, salvo en los casos en que ley exige determinada solemnidad para la validez de la prueba.

Pese a las anteriores precisiones, no puede pasar por alto esta Sala de Decisión, que el valor probatorio de dichas declaraciones debe ser analizado con el rigor propio de la prueba recaudada al interior del proceso, pues el hecho de no haberse solicitado su ratificación por la parte contra quien se aduce no la releva del deber de contener elementos que permitan dar por probada las circunstancias allí contenidas, tales como el determinar el testimoniante la razón del conocimiento de los hechos sobre los cuales depone.

A juicio de la Sala si bien es cierto que las señoras Claudia Luz Galindo Mesa, Anabel Galindo Mesa y Martha Lucia Molina Patiño, informaron sobre la existencia de una unión marital de hecho por 5 años entre la pareja hasta la fecha de la muerte del causante, también lo es que la señora Martha Lucia Molina Patiño, madre del causante y testigo en este juicio, adujo que Eliana Andrea y su hijo se encontraban separados cuando este falleció.

En ilación a lo anterior, el Fondo privado le negó el 50% de la prestación económica a la señora Eliana Andrea Saldarriaga Galindo aduciendo que “...*En cuanto al porcentaje que actualmente se encuentra en reserva y que corresponde al porcentaje que le correspondería a la señora Eliana Andrea Saldarriaga Galindo quien se presenta en calidad*

de compañera permanente, le informamos que realizada una validación a la documentación aportada y a las gestiones de campo efectuadas no se logró establecer con exactitud el tiempo de convivencia entre nuestro afiliado, el señor Héctor Mauricio Ríos Molina (q.e.p.d.) y la señora Eliana Andrea Saldarriaga Galindo...”.

Así las cosas, conforme al material probatorio analizado en conjunto considera la Sala que no se encuentra acreditado el requisito de convivencia entre los señores Eliana Andrea Saldarriaga Galindo y Héctor Mauricio Ríos Molina, entendiéndolo como la conformación de una familia “con vocación de permanencia, vigente para el momento de la muerte” del causante.

En consecuencia, se confirmará la decisión absolutoria en este aspecto, por las razones expuestas.

DE LA INDEXACIÓN DEL RETROACTIVO PENSIONAL

La indexación es el mecanismo objetivo de corrección monetaria que se aplica cuando las entidades administradoras que integran el sistema de seguridad social pagan tardíamente las obligaciones a su cargo, y la ley no prevé otra forma de solucionar su detrimento económico.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, después de analizar y ponderar en diferentes sentencias los efectos jurídicos y las consecuencias negativas que ocasiona la depreciación de la moneda, ha aceptado la aplicación del sistema de corrección monetaria con el fin de solucionar el detrimento económico que sufren los trabajadores cuando no se les paga oportunamente sus acreencias laborales, y ha explicado que con la indexación o corrección monetaria no se pretende un incremento de la deuda original sino la actualización de la moneda para contrarrestar la devaluación de la misma por el transcurso del tiempo, evitar una disminución en el patrimonio del trabajador o pensionado, y restablecer la equidad y la justicia (Sentencias de 2 de septiembre de 2008, Radicado 31.213; y SL9316 de 29 de junio de 2016, Radicado 46.984).

La Corporación mencionada ha explicado que con el reajuste anual se busca que la pensión no se rezague en su ingrediente económico, al punto de que su capacidad de compra se reduzca dramáticamente en evidente perjuicio de una población de suyo vulnerable, como es la de los pensionados, con sus potencialidades físicas y psíquicas notablemente disminuidas (Sentencia de 13 de marzo de 2012, Radicado 39.628).

De manera que como el reajuste anual de la pensión persigue que ésta no sufra deterioro económico, al punto de que su capacidad de compra se reduzca significativamente en perjuicio de los pensionados, y la indexación del retroactivo pensional solicitada en este juicio se orienta a compensar la pérdida del poder adquisitivo del valor reconocido por dicho concepto, que aún no ha pagado la entidad demandada, es claro que ambas figuras pueden coexistir y darse válidamente respecto de un mismo derecho pensional.

De otro lado, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el carácter constitucional del derecho al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, a partir de la interpretación sistemática de los principios previstos en el Preámbulo de nuestra Carta Política y en los artículos 1º, 25, 48 y 53 de ésta, adoctrinando que la actualización periódica de la mesada pensional es un mecanismo para garantizar el derecho al mínimo vital de las personas de la tercera edad, porque de lo contrario, la pérdida del poder adquisitivo de tal mesada les impediría satisfacer sus necesidades, razón por la cual la indexación de la pensión es una medida concreta a favor de los pensionados, que por regla general son adultos mayores o personas de la tercera edad, sujetos de especial protección constitucional (Sentencia T-007 de 18 de enero de 2013).

En criterio de la Sala, la indexación del retroactivo pensional reconocido en favor de cada uno de los menores Juan Sebastián y Mauricio Ríos Saldarriaga, Hilary Ríos López y Kevin Ríos Pérez, representados en su orden: por Eliana Andrea Saldarriaga Galindo, Sandra Sugely López Hernández y Marisela Pérez, resulta procedente, porque aparte de que como se indicó en precedentes la jurisprudencia ha aceptado la aplicación del sistema de corrección monetaria con el fin de solucionar el detrimento económico de los derechos laborales y

pensionales, dicho concepto fue reclamado en las demandas. Por lo que se confirmará en este punto la decisión.

DE LAS COSTAS

En lo que respecta a las costas, ha de indicarse que el artículo 365 del Código General del Proceso consagra un criterio objetivo para la imposición de las mismas, orientado a que sean cubiertas por la parte que pierde el litigio, sin hacer distinción sobre la persona que debe correr con la obligación una vez decidida la litis.

Le asiste razón a la apoderada de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., en el recurso de apelación al cuestionar la imposición de costas en primera instancia, punto este de la decisión que será revocado, para en su lugar absolver al Fondo privado de dicha condena, pues considera la Sala que estaba en discusión el derecho a la pensión de sobrevivientes en cabeza de la señora Eliana Andrea Saldarriaga Galindo, no quedándole otra opción a la accionada que dejar en suspenso el pago del 50% restante de la prestación hasta decisión judicial. Por ende, no resulta razonable imponer costas a cargo de la AFP.

Ante la prosperidad parcial del recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. no se causan costas en esta instancia.

Así las cosas, se confirmará y revocará la decisión que se revisa en apelación y consulta.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve:

PRIMERO: Revocar la condena en costas a cargo de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. En su lugar se absuelve de dicha condena.

SEGUNDO: Confirmar en lo demás la decisión que se revisa en apelación y consulta.

TERCERO: Ante la prosperidad parcial del recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. no se causan costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica en **ESTADOS**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

**EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA
LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
N ° 73 de Abril 30 de 2021

consultable aquí:
<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

**JAIME ALBERTO ARISTIZABAL
GOMEZ
MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA
CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA
CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

FRANCISCO ARANGO TORRES
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA
CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez
jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario
2364/12

Código de verificación:
eca75flab2e1dbfc33a40ae7f601b3d08c1cad9b4cb4e58b430fa56a7b0fa1a0

Documento generado en 29/04/2021 10:25:03 AM